

La consulta plantea si al atender las llamadas telefónicas que reciben de los ciudadanos deben de informar de los extremos contenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

En primer lugar es preciso indicar que en todo momento que se proceda a la recogida de datos de carácter personal, deberá de informarse de los extremos contenidos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica en el que se establece que “Los interesados a los que se soliciten datos personales deberán ser previamente informados de modo expreso, preciso e inequívoco:

- a) De la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter personal, de la finalidad de la recogida de éstos y de los destinatarios de la información.
- b) Del carácter obligatorio o facultativo de su respuesta a las preguntas que les sean planteadas.
- c) De las consecuencias de la obtención de los datos o de la negativa a suministrarlos.
- d) De la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición.
- e) De la identidad y dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante”.

Dicho lo anterior, en relación con el tratamiento de datos, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica dispone que “el tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”.

Además, el artículo 3 h) de la LO15/1999 define el consentimiento como “Toda manifestación de voluntad, libre, inequívoca, específica e informada

mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le conciernen”.

La manifestación de los requisitos legalmente exigidos al consentimiento del afectado se realiza en la práctica a través de la información al afectado, en el momento de la recogida de sus datos de carácter personal, de los extremos esenciales relacionados con el tratamiento, recabando a tal efecto su consentimiento en relación con los aspectos específicos e inequívocamente hechos constar en la mencionada información. Por tanto, para que quepa considerar que el consentimiento es informado será preciso dar cumplimiento al artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999, antes señalado.

La consideración de haber cumplido con el deber de informar según doctrina reiterada de la Audiencia Nacional corresponde al responsable del fichero la prueba del cumplimiento del deber de informar, y dicha prueba no podría obtenerse en caso de una mera información verbal.

Esta Agencia ha señalado reiteradamente que en caso de que se recaben telefónicamente datos de carácter personal será necesario informar al afectado, al menos sucintamente, de los extremos contenidos en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

A efectos probatorios será posible informar al afectado previamente del hecho de que la conversación será grabada y de los extremos esenciales contenidos en la Ley Orgánica 15/1999 sin que ello resulte contrario al secreto de las comunicaciones.

Por otro lado, no podemos entender que las llamadas efectuadas al departamento de atención al ciudadano de la policía local de la entidad consultante, tengan la consideración de llamadas de emergencia. Es a través de una Resolución de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la información la que concreta que números tienen la consideración de emergencia, así se hace constar en el artículo 77 del Real Decreto 424/2005 “(.). La aplicación del mecanismo de eliminación de marcas de supresión en origen de la identificación de la línea de origen para servicios de emergencias distintos de los atendidos a través del número 112 deberá ser

aprobada, a solicitud de las entidades prestadoras de los citados servicios de emergencia o de oficio, de manera previa y para cada caso particular o tipo de servicio de emergencia, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

La aplicación del mecanismo de eliminación de marcas de supresión en origen de la identificación de la línea de origen por motivos de seguridad pública o defensa nacional se realizará cuando así lo establezca por resolución el Ministerio competente en dichas materias. La resolución se tramitará y aprobará siguiendo los principios de transparencia y proporcionalidad, y será comunicada a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y al resto de Autoridades de Reglamentación a que se refiere el artículo 46 de la Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones.”

Por todo lo expuesto, podemos concluir que en el momento que la policía local recabe datos personales de los ciudadanos, para proceder a su tratamiento, informará aunque sea sucintamente, de los requisitos exigidos por la Ley, y podrá hacerse a través del establecimiento de una alocución permanente grabada en la que se haga referencia al tratamiento de los datos informando de los extremos contenidos en el artículo 5.1 y de la conservación de las cintas mientras dure el tratamiento.